

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 27º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-28590-2019
CARATULADO : MUÑOZ/FISCO DE CHILE - CONSEJO DEFENSA
DEL ESTADO SANTIAGO, COMUNA SAN MIGUEL

Santiago, veintinueve de Septiembre de dos mil veintitrés

VISTOS:

En causa digital **Rol C-28.590-2019**, por presentación de fecha 16 de septiembre de 2019, comparece don Boris Paredes Bustos, abogado, domiciliado en Pasaje Dr. Sótero del Río N° 326, oficina N° 707, comuna de Santiago, quien en representación de don **LUIS ALBERTO RODRÍGUEZ TORRES**, pensionado, domiciliado en Puerto Octay N° 8537, Presidente Bulnes, ciudad Hualpén; don **JUAN OJEDA MERCEGUE**, pensionado, domiciliado en Antofagasta N° 317, Higuera, ciudad Talcahuano y don **RAFAEL ARCÁNGEL MUÑOZ OPAZO**, pensionado, domiciliado en Pasaje 4 A casa 725, Boca Sur, San Pedro de la Paz, y deduce demanda en procedimiento ordinario (Juicio de Hacienda) de indemnización de perjuicios en contra del **FISCO DE CHILE**, representado -en su calidad de Presidenta del Consejo de Defensa del Estado- por doña María Eugenia Manaud Tapia, abogada, ambos domiciliados en Santiago, Agustinas 1687, edificio Plazuela de Las Agustinas, comuna de Santiago, a objeto que, en atención a los argumentos de hecho y derecho que esgrime, sea acogida en todas sus partes, y en definitiva, se declare que el demandado debe pagar, a título de indemnización de perjuicios por el daño moral sufrido por las torturas de que fueron objeto, la suma de \$200.000.000 (doscientos millones de pesos) a cada uno de los demandantes don Luis Alberto Rodríguez Torres, don Juan Ojeda Mercegue y don Rafael Arcángel Muñoz Opazo, más reajustes e intereses desde la notificación de esta demanda y hasta el pago efectivo y total de las mismas, o la suma que el tribunal estime ajustada a derecho y equidad y al mérito de autos; todo con costas.

En folio 8, consta que con fecha 10 de octubre de 2019, se **notificó** personalmente a doña María Eugenia Manaud Tapia, Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, en su calidad de representante legal del demandado Fisco De Chile, de la acción deducida en su contra.

En folio 9, se presenta doña Ruth Israel López, Abogado, Procurador Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado por el Fisco de Chile, persona jurídica de derecho público, quien **contestando la demanda** deducida en su contra, solicita el rechazo de la demanda entablada en su contra, conforme a los fundamentos de hecho y de derecho que expone, oponiendo, en primer lugar, la **excepción** de reparación integral, improcedencia de la indemnización dineraria alegada por haber sido ya **indemnizados los**



demandante; en segundo lugar, opone la **excepción** de prescripción extintiva de la acción civil de indemnización de perjuicios con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil y en **subsidio**, en caso que el tribunal estime que la norma anterior no es aplicable al caso, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2.515, en relación con el artículo 2.514 del Código Civil; y **en subsidio de las defensas y excepciones precedentes**, opone las alegaciones en cuanto a la naturaleza de la indemnización solicitada y los montos pretendidos, refiriéndose a la fijación de la indemnización por daño moral y luego a la improcedencia del pago de reajustes e intereses en la forma solicitada. **En subsidio**, de lo anterior, solicita rebajar sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido.

En folio 15, la demandante evacúa el trámite de **Réplica**.

En folio 17, la demandada evacúa el trámite de **Dúplica**.

En folio 19, se **recibió la causa a prueba**, fijándose al efecto los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos y rindiéndose por las partes la prueba documental y testimonial que obra en autos. En folio 34, consta resolución de la ltma. Corte de Apelaciones de Santiago, que confirma interlocutoria de prueba.

En folio 48, **se citó a las partes a oír sentencia**.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, en estos autos ha comparecido don Boris Paredes Bustos, abogado, en representación de don Luis Alberto Rodríguez Torres, don Juan Ojeda Mercegue y don Rafael Arcángel Muñoz Opazo e interpone demanda en procedimiento ordinario (Juicio de Hacienda) de indemnización de perjuicios en contra del Fisco De Chile, representado -en su calidad de Presidenta del Consejo de Defensa del Estado- por doña María Eugenia Manaud Tapia, abogada, a objeto que, en atención a los argumentos de hecho y derecho que esgrime, sea acogida en todas sus partes, y en definitiva, se declare que el demandado debe pagar, a título de indemnización de perjuicios por el daño moral sufrido por las torturas de que fueron objeto, la suma de \$200.000.000 (doscientos millones de pesos) a cada uno de los demandantes don Luis Alberto Rodríguez Torres, don Juan Ojeda Mercegue y don Rafael Arcángel Muñoz Opazo, más reajustes e intereses desde la notificación de esta demanda y hasta el pago efectivo y total de las mismas, o la suma que el tribunal estime ajustada a derecho y equidad y al mérito de autos; todo con costas.

Funda el libelo expresando en cuanto a los **Hechos** que, los aciagos hechos que describirá a continuación han sido reconocidos voluntariamente por el Estado de Chile a través de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Explica que si bien existe una clara vinculación de los hechos relatados, por el lugar en que se cometieron y, en algunos casos, por los hechores, además de una similitud en el tiempo, relata de manera individual, pero resumida, las torturas, vejaciones y otros tratos inhumanos y degradantes a los que fueron sometidos los demandantes por agentes del Estado y que constituyen el fundamento fáctico de esta demanda.

1.- LUIS ALBERTO RODRÍGUEZ TORRES, con registro en la Comisión de Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas



Prisión Política y Tortura, Valech 2, N° 7542, nacido el 15 de Mayo de 1952, de actuales 67 años de edad. A la fecha de ocurrencia de los hechos era militante del Partido Socialista. Fue detenido en su domicilio el día 12 de Septiembre de 1973 por infantes de marina pertenecientes a la Segunda Zona Naval de Talcahuano. Trasladado al Cuartel Rodríguez, base naval de Talcahuano. En dicho lugar se mantuvo privado de libertad durante cuatro semanas. Fue objeto de interrogatorios, donde le mostraban fotos y nombres de personas que no conocía. Sufre torturas físicas y sicológicas durante el día y la noche. Posteriormente, fue llevado al gimnasio Apostadero, junto a otros detenidos, por funcionarios de la Infantería de Marina Base Naval de Talcahuano, donde continuaron los interrogatorios y las torturas físicas y sicológicas. Recuerda que les quitaban las ropas y los metían a las duchas y lo torturaron hasta caer desmayado al piso. Indica que al despertar estaba en el piso tapado con una frazada y con fuertes dolores y moretones en todo el cuerpo. En las noches no los dejaban dormir, los amenazaban con que los iban a fusilar y luego arrojarlos al mar. Lo mantienen durante un mes en ese gimnasio, sufriendo todo tipo de torturas y vejámenes. Luego, es trasladado a la Isla Quiriquina por personal de Infantería de Marina, Segunda Zona Naval de Talcahuano. En dicho lugar permanece detenido durante cinco meses y obligado a realizar trabajos forzados. Continúan los interrogatorios y las torturas físicas y sicológicas. Fue tratado, junto a otros detenidos, peor que los animales. En una de las tantas torturas de que fue objeto, sufrió una fractura de tobillo y la rotura del tendón de Aquiles del pie izquierdo. Lo tuvieron que trasladar al Hospital Naval donde fue operado y le pusieron yeso en la pierna izquierda. Al otro día de haber sido enyesado, fue llevado devuelta a la Isla Quiriquina. Luego de un mes, fue nuevamente llevado al Hospital Naval, donde le retiraron el yeso, debiendo hacer su rehabilitación solo. Sin embargo, los interrogatorios no cesaron y continuaron con las torturas. A los tres meses de estar preso, recibió un culatazo con el arma de un infante de marina en el ojo izquierdo. Nuevamente fue llevado al Hospital Naval para ser atendido, pese a lo cual, producto del golpe recibido perdió un 30% de visión en dicho ojo. Cuando logró volver a caminar con una leve cojera, volvió con los demás presos políticos, intensificándose las torturas mientras más tiempo pasaba. Comenzaron a desaparecer presos, a quienes los sacaban para supuestos “chequeos médicos” y no regresaban nunca más. En el mes de Febrero del año 1974 lo llevaron junto a su hermano Juan a la Comandancia Base Naval, donde les hicieron prometer que lo que habían visto, oído y sufrido lo debían guardar por siempre, de lo contrario serían nuevamente detenidos y fusilados. Posteriormente, fue llevado al Servicio de Inteligencia de la Base Naval de Talcahuano, donde nuevamente fue interrogado y le hicieron firmar un documento, que no pudo leer, quedando finalmente en libertad el 25 de Marzo de 1974.- Producto de las torturas sufridas, además de los físicos, quedó con graves efectos sicológicos, en la especie, trastorno depresivo ansioso, trastorno de descontrol impulsivo, trastorno de adaptación con ánimo depresivo e irritable crónico con rasgos paranoideos.

2.- JUAN OJEDA MERCEGUE, con registro en la Comisión de Prisión Política y Tortura N° 6094, nacido con fecha 21 de Junio de 1944, de actuales 75 años de edad. A la fecha de ocurrencia de los hechos era militante del



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: KXQVXXHPZDF

Partido Comunista. Fue detenido el día 02 de Diciembre de 1973 cuando llegaba a su domicilio después de su trabajo en Sigdo Kopeer por personal de Infantería de Marina, quienes le pusieron unas gomas elásticas en los ojos y lo trasladaron amarrado, a punta de culatazos de fusil, hasta un camión. Otro grupo de infantes de marina se dirigen a su hogar, donde se encontraba su cónyuge embarazada y su hija de un año de edad, y procedieron a allanar su hogar, buscando supuestas armas. Junto a otros detenidos fue puesto en el piso del camión, donde sus aprehensores caminaban sobre sus cuerpos sin compasión de dolores o del sufrimiento que provocaban. Es llevado a la Base Naval de Talcahuano, donde fue interrogado y torturado física y verbalmente y luego llevado a la Isla Quiriquina, donde fue encerrado en el gimnasio de grumetes, acusado de agitador político y comunista por su condición de delegado del personal obrero y postulante a la directiva sindical. Se mantuvo en precarias condiciones de higiene y alimentación, durmiendo en un suelo previamente mojado por sus captores y constantemente torturado con golpes de pies y puños y golpes de agua con mangueras de alta presión. Queda finalmente en libertad el día 24 de Diciembre de 1973, con la amenaza de que si algo ocurría en el barrio donde vivía volverían para fusilarlo, padeciendo de estrés post traumático hasta la fecha por la experiencia vivida.

3.- RAFAEL ARCÁNGEL MUÑOZ OPAZO, con registro en la Comisión de Prisión Política y Tortura N° 16.271, nacido con fecha 23 de Septiembre de 1948, de actuales 70 años de edad. A la fecha de ocurrencia de los hechos era militante de las Juventudes Comunistas y empleado público. Fue detenido en su domicilio por personal del Ejército de Chile el día 11 de Septiembre de 1973. Fue subido a un camión, donde se encuentra con algunos compañeros de trabajo, siendo trasladado a la Cuarta Comisaría de Concepción, lugar donde fue torturado física y psicológicamente, pues sus captores pensaban que tenía armas escondidas. Luego, fue trasladado a la Isla Quiriquina, lugar donde es recibido con un fuerte golpe con una metralleta en el estómago, que lo deja sin respiración, por personal de Infantería de Marina. En dicho lugar, es interrogado y torturado permanentemente con golpes de pies y puños en todo su cuerpo y culatazos, además de hacerlo dormir en un piso mojado. Permanece en la Isla Quiriquina hasta el día 01 de Octubre de 1973, fecha en la que es dejado en libertad. Detenido en una segunda oportunidad aproximadamente el día 25 de Octubre de 1973 en su lugar de trabajo por personal de Investigaciones, siendo llevado a un subterráneo del Cuartel de la Policía de Investigaciones, con otros detenidos, y recibiendo numerosos golpes y gritos. Al día siguiente, fue trasladado al Regimiento Guías de Concepción, lugar donde fue obligado a tenderse en el suelo, junto a otros detenidos, mientras los militares corrían sobre sus cuerpos. En la tarde del mismo día, es trasladado al Estadio Regional de Concepción, lugar donde permanece detenido por 45 días, y donde continúan las torturas consistentes en golpes de pies y puños y simulacros de fusilamiento. Producto de la experiencia vivida, padece de graves secuelas psicológicas, en la especie “Síndrome Secuencial a Traumatización Extrema”, aún en tratamiento.

Se refiere al **Daño Producido**, indicando que los tormentos ya han sido descritos para cada caso en particular y no tiene sentido relatarlos nuevamente, por lo que queda claro que, como consecuencia directa de las



torturas producidas a los demandantes de autos, inequívocamente, un perjuicio tanto psíquico, como físico inconmensurable provocado por el Estado de Chile durante el periodo del gobierno dictatorial. Los daños físicos y psíquicos tienen carácter de permanentes, pues aunque hayan transcurrido más de cuarenta años de lo sucedido las personas continúan con secuelas producto de la privación de libertad y las distintas torturas a las que fueron sometidos, además de que muchos fueron obligados, directa o indirectamente, a abandonar el país, sin poder retornar, algunos incluso alejándose de sus familias. Reproduce lo expresado a ese respecto por la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura y agrega que los descritos daños emocionales, morales y materiales que necesariamente se causaron a las víctimas de torturas, son lo que está pidiendo por la presente demanda sean indemnizados y consigna jurisprudencia nacional acerca del concepto de daño moral y sostiene que en razón a ello es que demanda al Fisco de Chile, por daño moral, como consecuencia directa del secuestro y torturas de que fueron objeto, el pago de doscientos millones de pesos (\$200.000.000), para cada uno de los demandantes, suma que deberá ser pagada con reajustes de acuerdo al IPC e intereses legales desde la fecha de notificación de la demanda hasta su completo pago, más las costas del juicio; o en su defecto el monto indemnizatorio que se estime, de conformidad con su apreciación y valorización del daño.

Se remite luego al **Derecho** señalando que de los hechos delictuosos narrados precedentemente, es civilmente responsable el Estado de Chile, ya que a quienes se acusa su autoría, a la fecha de su comisión, eran miembros del Ejército de Chile y de otras ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública o civiles adscritos a las mismas, quienes se encontraban revestidos de autoridad pública. El Estado de Chile ha reconocido expresamente su responsabilidad en la práctica de secuestro y tortura ocurrida durante la dictadura militar, mediante distintos actos e instrumentos jurídicos, destacando entre ellos el Informe emitido por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y el Informe sobre Prisión Política y Tortura, denominado "Informe Valech". Resalta que en el mencionado Informe Valech, los demandantes fueron reconocidas como víctimas de prisión política y tortura. Añade que la responsabilidad del Estado, por el daño moral ocasionado, emana en primer lugar de un principio general de derecho administrativo que obliga a responder al Estado por los perjuicios causados por actos u omisiones de sus agentes a las víctimas que no se encuentran obligadas a soportarlos, el que se ha desarrollado sobre la base de la jurisprudencia y de la legislación especial, y que es anterior a la fecha de comisión de los hechos juzgados en la presente causa y en suma, la responsabilidad del Estado emana del Derecho Administrativo, en razón del hecho propio del Estado al haber actuado como órgano cometiendo actos ilícitos que causaron daño a las personas, específicamente de la Constitución Política de 1925, de la Constitución Política de 1980 y del Derecho Internacional.

Prosigue refiriéndose a la **responsabilidad del Estado en la Constitución Política de 1925**, indicando que la responsabilidad del Estado, consagrada en las Actas Constitucionales números 2 y 3 y, en la actualidad, en la Constitución de 1980, reconoce claros antecedentes en la Constitución



Política de 1925, vigente a la época de estos actos ilícitos. La doctrina iuspublicista ha sostenido que existe un principio general de derecho administrativo que obliga a responder al Estado por los perjuicios causados por actos u omisiones de sus agentes a las víctimas que no se encuentran obligadas a soportarlos. Cita a ese respecto doctrina del profesor Eduardo Soto Kloss. Señala que los otros preceptos que sustentan el principio general de responsabilidad del Estado, a la luz de la Constitución de 1925, son los artículos 4, 10 N° 1 y 10 N° 9. El artículo 4 de la Constitución de 1925, fuente directa de los actuales artículos 6 y 7 de la Constitución de 1980, establecía la obligatoriedad de los órganos del Estado de ceñirse a las prerrogativas y facultades que les entregaba la ley y los actos que excedieran sus atribuciones adolecían de nulidad. Si bien no se agregaba que de dichos actos nulos originaban las responsabilidades que la ley señale, no puede entenderse de otra forma, pues sabido es que la nulidad de los actos conlleva siempre y en todo caso la indemnización de los perjuicios causados a resultas de la nulidad. En cuanto a lo preceptuado por el actual artículo 6 de la que, como señaló, posee su fuente en el artículo 4 citado, existe meridianamente claridad de que los órganos del Estado siempre deben sujetar su actuar a la preceptiva constitucional y a las leyes, pues si fuera otra la interpretación no se entendería el principio de supremacía constitucional. Por lo demás el principio de sujeción a la Constitución se plasma en el artículo 2 de la Constitución de 1925 que dispone: "La soberanía reside esencialmente en la nación, la cual delega su ejercicio en las autoridades que esta constitución establece". Esclarece que rige un principio general de responsabilidad del Estado por sus actos y omisiones, basado en los artículos 1, 2, 4, principio que se concreta en el artículo 10 N° 10 y N° 9 de la Constitución de 1925, que consagran, respectivamente, el derecho de propiedad, sin distinción alguna y la igual repartición de las cargas públicas. Profundiza indicando en cuanto al primer precepto, esto es, el artículo 10 N° 10 de la Constitución de 1925, que cabría decir que todo daño fruto del actuar de algún órgano del Estado, como lo es el Ejército de Chile, constituye un desmejoramiento de la esfera patrimonial de los sujetos afectados y genera, el derecho a exigir la responsabilidad del Estado, pues el demandante, fue privado de bienes que forman parte de su esfera de la personalidad y, según prescribe el citado constitucional, "nadie puede ser privado de la de su dominio, ni de una parte de ella, o del derecho que a ella tuviere, sino en virtud de sentencia judicial o de expropiación por razón de utilidad pública, calificada por una ley". Pues bien, ninguna de las hipótesis descritas se verificó y, sin embargo, de igual manera se le privó de bienes personalísimos al atentar contra la esfera subjetiva e infligirle el daño moral indicado. A su turno, el artículo 10 N° 9 de la Constitución de 1925, fuente directa del artículo 19 N° 20 de la Constitución de 1980, aseguraba el principio de la igual repartición de las cargas públicas, el que obliga a indemnizar a todo aquel que infringe un daño, ya que dicho daño producido antijurídicamente, implica una ruptura de la igual amparada frente a sus violaciones, y en especial a aquellas cometidas por los órganos públicos. Este detrimento en la esfera de los afectos que ha sufrido la actora infringió la igual repartición de las cargas públicas al exponer a su persona, a diferencia de otras muchas, a sufrimientos inhumanos. La actuación de Carabineros de Chile y del Ejército de Chile,



órganos del Estado, constituyen un desigual tratamiento que infringe el artículo 10 N° 1 y 10 de la Constitución de 1925.

Continúa refiriéndose acerca de la **imprescriptibilidad de la acción**, indicando que la acción de derecho público para exigir la responsabilidad del Estado por actos u omisiones por las cuales se ha producido daño a personas que no se encuentran sujetas a sufrir el gravamen de soportarlos por atentar, a la igual repartición de las cargas públicas, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, según la doctrina unánime de los autores iuspublicistas, es imprescriptible. La responsabilidad del Estado es un problema de derecho público y al cual cabe aplicar reglas de derecho público y no las normas del Título XXXV del Código Civil. Respaldando lo indicado cita jurisprudencia de los tribunales superiores que también han recogido la inaplicabilidad de las reglas del Título XXXV del Libro IV del Código Civil y, por ende, de las reglas en materia de prescripción, causa ingreso N°24.288-2016, de la Excma. Corte Suprema, en sentencia de 5 de septiembre de 2016, que en lo pertinente transcribe y concluye que las normas en materia de prescripción que contempla el Código Civil para los delitos y cuasidelitos no resulta aplicable a los procesos en que se persiga la responsabilidad extracontractual del Estado, ya que en el caso de marras también existen las normas de derecho público que rigen la responsabilidad del Estado como son los preceptos citados de la Constitución de 1925. Ergo la acción que se ejerce en estos autos es imprescriptible.

En cuanto a la **forma de operar de las disposiciones constitucionales**, señala que las disposiciones constitucionales que consagran la responsabilidad del Estado por los daños cometidos en cualquiera de sus actividades tienen una vinculación directa sin ser necesaria la dictación de una norma de inferior rango que disponga su aplicación; es decir, poseen operatividad propia y, obviamente, desde el momento que asumen su carácter de normas constitucionales priman por sobre toda otra disposición. Por esta razón y dada la inexcusabilidad de su función consagrada en la propia Constitución, el juez se encuentra sujeto a la imperatividad de resolver el caso sometido a su conocimiento. En esta función la primera exigencia es someterse a la norma fundamental vigente al momento de la ocurrencia de los hechos, la cual establecía clara y precisamente la responsabilidad del Estado por los daños ocasionados por sus órganos.

Sigue exponiendo acerca de la **recepción de la doctrina por parte de la jurisprudencia nacional**, mencionando que la citada responsabilidad del Estado, fundada en una primera etapa sobre la legislación civil, evolucionó para fundarse en principios de derecho público. La doctrina cita como los primeros fallos en que se sustenta la responsabilidad en principios de derecho público “Sociedad Fuschs y Plath con Fisco”, sentencia de 11 de enero de 1908 y “Lapostol con Fisco”, sentencia de 8 de enero de 1930. Sin embargo, será en la sentencia dictada en “Hexagon con Fisco”, de 28 de julio de 1987, en que expresamente se declaran inaplicables las disposiciones del Código Civil para decidir la demanda dirigida contra el Fisco, resolviendo el caso sobre la base de las normas constitucionales y legales diversas al Código Civil. Desestima la infracción del artículo 2332 del citado Código al no darle



aplicación e igualmente las referidas a las Actas Constitucionales N° 2 y 3, la Constitución y Ley Orgánica Constitucional N° 18.575, en que radica el origen de la responsabilidad del Fisco. Destaca la circunstancia de que la jurisprudencia, sobre la base de la legislación especial, ha sustentado la responsabilidad de la Administración, y esa normativa especial arranca de los artículos 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 38 de la Constitución Política de la República, 4° y 42 de la Ley N° 18.575. La norma del inciso segundo del artículo 21 de la Ley N° 18.575 no afecta la disposición del artículo 4°, por lo que a su respecto debe atenderse a la concepción de la Administración del Estado que expresa el inciso segundo del artículo 1° del mencionado cuerpo de leyes, de forma tal que, sin duda alguna, este régimen de responsabilidad se aplica a las Fuerzas Armadas, como a las de Orden y Seguridad Pública. En lo sustancial la jurisprudencia ha evolucionado hasta llegar a un estado, pacífico en la actualidad, que reconoce la responsabilidad del Estado-Administrador, exigiendo, en la mayoría de los casos, un factor de imputación. En el caso el factor de imputación es la responsabilidad del órgano por la falta personal del agente. Indica que la doctrina de la responsabilidad del Estado emanada del Derecho Público ha sido recogida íntegramente en el histórico fallo dictado en el caso del homicidio de los profesionales Guerrero, Nattino y Parada, el que se encuentra ejecutoriado y cuya parte pertinente transcribe y aprecia que la jurisprudencia expuesta en el número anterior tiene su antecedente en la importante sentencia dictada por la Corte Suprema conociendo de un recurso de Casación en el Fondo interpuesto por el Fisco en los autos con el ya citado caso '1Hexagón Limitada con Fisco', el que reproduce en lo pertinente.

En cuanto a **otras disposiciones que obligan a indemnizar**, indica que a mayor abundamiento y sin perjuicio de la obligación del estado de indemnizar los daños causados por sus órganos en el ejercicio de sus funciones en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política de 1925, las Actas Constitucionales y la Constitución de 1980, su responsabilidad extracontractual también emana de la acción de indemnización contemplada en los artículos 4 y 44 de la Ley 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado que consagran la responsabilidad del Estado por falta de Servicio, normas en la que se hace responsable al Estado por los daños que causen los órganos de la Administración, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado.

Se refiere luego a la **concurrencia de los requisitos para indemnizar en el caso de autos**, sosteniendo que, en el caso ad litem se dan todos los requisitos que obligan al Estado a indemnizar los perjuicios causados: 1.- En cuanto al daño moral, por el solo hecho de haberse producido un delito éste se presume. 2.- La acción u omisión emanó de un órgano del Estado, agentes del Estado torturaron a mis mandantes sin que haya demostrado la sujeción a procedimiento alguno. El hecho que causó daño fue ejecutado por el Estado de Chile, puesto que fue un órgano de su administración el que actuó y debe entenderse que ha actuado el Estado como tal. 3.- Nexo causal. El daño a las víctimas emana, justamente, de la perpetración del delito civil. 4.- Por último, no existen causales de justificación que eximan al Estado de su responsabilidad en este caso.



Analizando los fundamentos del Derecho Internacional que obligan al Estado a indemnizar, precisa que de acuerdo a los hechos narrados precedentemente y que afectaron a cada uno de los demandantes los agentes del Estado incurrieron en una falta personal, al privar de forma ilegítima de la libertad y someter a torturas a las demandantes. En esa perspectiva el Estado, no puede desvincularse de la falta en que incurrieron sus agentes, ya que fue el propio Estado el que les asignó la función pública de reunir información estratégica para la seguridad nacional, la que ejercieron abusivamente cometiendo falta personal en su ejercicio, comprometiendo con ello la responsabilidad del Estado. Atendido además que los hechos generadores de la responsabilidad que se demanda, tienen además el carácter de violación a los derechos humanos, delito de lesa humanidad, crimen de guerra, u otra calificación concurrente con la de secuestro agravado o torturas, la responsabilidad del Estado debe determinarse asimismo de conformidad con los convenios o tratados internacionales, las reglas de derecho internacional que se consideran iuscogens y el derecho consuetudinario internacional, sin perjuicio de encontrarse también estipuladas en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, cuyo artículo 27 dispone que “el Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales” y que de hacerlo comete un hecho ilícito que compromete su responsabilidad internacional (Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Edición 2000, Humberto Nogueira Alcalá, “Las Constituciones Latinoamericanas”, página 231). Refiere que, en efecto, de acuerdo con este último precepto la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícito queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, las que no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar disposiciones de Derecho Interno y a ese respecto debe también tenerse presente el carácter consuetudinario de estas normas y que atendida su naturaleza no son creadas sino simplemente reconocidas por los Estados, de lo que deriva su ineludible aplicación, de manera tal que produciéndose un hecho ilícito imputable a un Estado la responsabilidad de éste surge de inmediato por la violación de la norma de Derecho Internacional, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias indeseadas. Indica que, en el mismo sentido, el artículo 131 de la Convención de Ginebra pretende hacer efectiva la responsabilidad que resulta de esta clase de hechos y no se limita a la de carácter penal. Lo mismo ocurre con el artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, vigente desde el 27 de Enero de 1980, que previene -según ya se afirmó- que los Estados no pueden invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales -en la especie la de establecer responsabilidades-, incumplimiento del que ciertamente derivaría responsabilidad por un ilícito de índole internacional. Lo anterior conduce a sostener que el derecho a la reparación es un derecho fundamental, esto es, uno de aquéllos que los Estados declaran para asegurar y hacer posible la convivencia democrática, el que por su naturaleza es imprescriptible. El Derecho Internacional, tanto a partir de normas consuetudinarias como convencionales, ha establecido que un hecho ilícito internacional genera la responsabilidad del Estado y la consiguiente obligación de reparar el daño. Para que esta responsabilidad pueda hacerse efectiva deben concurrir dos elementos. El primero de ellos es



la violación de una obligación internacional, situación que en el caso presente se encuentra plenamente cumplida pues la privación ilegítima de libertad y las torturas graves y reiteradas, cometidos en contra de las demandantes, mirados desde la perspectiva del derecho internacional, asumen la tipología de delitos contra el derecho internacional. Y en este caso específico, como delitos de Lesa Humanidad. En efecto, en la medida que el ilícito cometido se da en el contexto histórico de atentados masivos, reiterados y sistemáticos en contra de la población, motivados por móviles políticos e ideológicos y ejecutados por agentes estatales, otorgan la configuración de un delito de Lesa Humanidad, con las naturales consecuencias jurídicas que derivan de dicha calificación.

A continuación, se refiere a la **procedencia de la indemnización del daño moral**, sosteniendo que la responsabilidad del Estado es integral, es decir, debe repararse y todo daño causado a un particular y, para una correcta interpretación de estas disposiciones que dejan un claro vacío las normas de derecho administrativo indicadas, es necesario acudir al derecho común. La indemnización comprende -según el artículo 2329- todo daño, por lo que naturalmente está incluido el daño moral. La procedencia de la reparación del daño moral está reconocida en forma unánime por la doctrina y jurisprudencia nacional, ya a estas alturas resulta indiscutible. En efecto, toda persona que alega que el perjuicio causado a un tercero le lesiona directamente a ella, puede iniciar una acción de reparación por el daño que le provocó esta situación. Es más, se ha dicho con insistencia por nuestros tribunales, que los daños morales provocados a los parientes más próximos no necesitan de prueba, presumiéndose el perjuicio por la muerte de su parientes y de ese modo lo ha sostenido la Corte Interamericana en el caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones (Sentencia del 10 de septiembre de 1993, Serie C N° 15, párr. 76), de todo lo cual fluye que el Estado de Chile debe responder por el perjuicio que han ocasionado funcionarios del Ejército de Chile actuando en su calidad de tal, puesto que se dan todos los supuestos necesarios para determinar el perjuicio moral sufrido por los actores.

SEGUNDO.- Que, contestando la demanda civil de indemnización de perjuicios deducida en su contra, el demandado Fisco de Chile solicita su total rechazo y repasando los antecedentes del libelo expone que, con fecha 16 de septiembre de 2019, don Luis Alberto Rodríguez Torres, don Juan Ojeda Mercegue y don Rafael Arcángel Muñoz Opazo, representados por el abogado Boris Paredes Bustos, interpusieron demanda civil de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile para que sea condenado a pagarles la suma total de \$600.000.000 (seiscientos millones de pesos), a razón de \$200.000.000 (doscientos millones de pesos), para cada uno, más reajustes e intereses desde la fecha de la demanda, junto con las costas, por el daño moral sufrido como consecuencia de haber sido víctimas de prisión política y torturas.

Luego, en el apartado II denominado “*Excepciones, Defensas y Alegaciones...*”, opone la **excepción de reparación integral, improcedencia de la indemnización alegada por haber sido ya indemnizados los demandantes**, refiriéndose al **marco general sobre las reparaciones otorgadas** indicando que, no resulta posible comprender el régimen jurídico de las reparaciones por infracciones a los Derechos Humanos si no se posicionan



correctamente estas indemnizaciones en el panorama jurídico nacional e internacional, debiéndose considerar el ámbito de la llamada “*Justicia Transicional*”. Indica que, en efecto, el denominado dilema “justicia versus paz”, es sin lugar a duda, uno de los pilares sobre los cuales descansa el edificio de aquella justicia transicional y que argumentos en favor de amnistías generales que porten la necesaria tranquilidad a un país, deben lidiar con la imperiosa necesidad de que una sociedad se mire a sí misma y reconozca los errores del pasado para así pronunciar aquel imperioso “nunca más” y en esta perspectiva, las transiciones son, y han sido siempre, medidas de síntesis mediante las cuales determinadas sociedades, en específicos momentos históricos, definen las proporciones de sacrificio de los bienes en juego al interior de aquel profundo dilema.

Indica que, por otro lado, no debe olvidarse que, desde la perspectiva de las víctimas, la reparación de los daños sufridos juega un rol protagónico en el reconocimiento de aquella medida de justicia por tantos años buscada. Las negociaciones entre el Estado y las víctimas revelan que tras toda reparación existe una compleja decisión de mover recursos económicos públicos, desde la satisfacción de un tipo de necesidades públicas, a la satisfacción de otras radicadas en grupos humanos más específicos. Ese concurso de intereses o medida de síntesis se exhibe normalmente en la diversidad de contenidos que las comisiones de verdad o reconciliación proponen como programas de reparación. Esos programas, en efecto, incluyen beneficios educacionales, de salud, gestos simbólicos u otras medidas análogas diversas a la simple entrega de una cantidad de dinero.

Refiriéndose luego a la **complejidad reparatoria**, cita doctrina de la autora Elizabeth Lira y respecto de los objetivos de la justicia transicional fueron: “(a) *el establecimiento de la verdad en lo que respecta a las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura; (b) la provisión de reparaciones para los afectados; y (c) el favorecimiento de las condiciones sociales, legales y políticas que prevean que aquellas violaciones puedan volver a producirse*”, añadiendo que la llamada Comisión Verdad y Reconciliación, o también llamada Comisión Rettig, en su Informe Final propuso una serie de “*propuestas de reparación*” entre las cuales se encontraba una “*pensión única de reparación para los familiares directos de las víctimas*” y algunas prestaciones de salud y dicho informe sirvió de causa y justificación al proyecto de ley que el Presidente de la República envió al Congreso y que luego derivaría en la Ley 19.123, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación.

Hace presente que, asumida la idea reparatoria, la Ley 19.123 y otras normas jurídicas conexas han establecido los diversos mecanismos mediante los cuales se ha concretado esa compensación, exhibiendo aquella síntesis que explica cómo el país ha afrontado este complejo proceso de justicia transicional. Complementa indicando que, en ese sentido, la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha realizado principalmente a través de tres tipos de compensaciones, a saber: a. Reparaciones mediante transferencias directas de dinero; b. Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y c. Reparaciones simbólicas; las que buscan la reparación moral y patrimonial de las víctimas.



Analiza luego, cada una de esas compensaciones y lo que estas han cubierto, resaltando en cuanto a las reparaciones específicas que en lo tocante al caso de marras hace presente que los actores han recibido beneficios pecuniarios al amparo de la ley N.º 19.992 y sus modificaciones, indicando que a efecto, la ley 19.992 y sus modificaciones estableció una pensión anual de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos individualizados en el anexo "Listado de prisioneros políticos y torturados" de la Nómina de personas Reconocidas como Víctimas. Revela que, adicionalmente, los actores recibieron en forma reciente el Aporte Único de Reparación Ley 20.874, por \$1.000.000.-, por lo que los actores han recibido, hasta la fecha, los beneficios y montos contemplados en las leyes de reparación mencionadas.

Refiriéndose a lo que denomina como la **identidad de causa entre lo que se pide en estos autos y las reparaciones realizadas**, indica que, tanto las indemnizaciones que se solicitan en estos autos como el cúmulo de reparaciones antes indicadas pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos. De esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación han compensado aquellos daños, no procediendo, por ello, ser compensados nuevamente. Reproduce jurisprudencia en ese sentido y menciona que órganos internacionales de tanta importancia como la Corte Interamericana de Justicia han valorado positivamente la política de reparación de violaciones de Derechos Humanos desarrollada por Chile, a tal punto que han denegado otro tipo de reparación pecuniaria luego de tomar en consideración los montos ya pagados por el Estado por conceptos de pensiones, beneficios y prestaciones públicas y en ese mismo sentido, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha considerado los beneficios de establecer un sistema compensatorio único para todas las víctimas que no genere desigualdades.

Concluye que, estando la acción interpuesta en autos basada en los mismos hechos y pretendiendo ella indemnizar los mismos daños que han inspirado precisamente el cúmulo de acciones reparatorias, ya enunciadas, y al tenor de documentos oficiales que indica acompañar, resultan razones por la que opone la excepción comentada.

Luego, en el numeral II.2, opone **la excepción de prescripción extintiva de la acción deducida de indemnización de perjuicios** con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil (cuatro años), en relación con lo dispuesto en el artículo 2497 del mismo Código, solicitando que, por encontrarse prescritas, se rechace la demanda en todas sus partes, argumentando que conforme a los relatos efectuados por los demandantes, sus detenciones, privación de libertad y torturas se habrían producido: 1) entre el 12 de septiembre de 1973 y el 25 de marzo de 1974, respecto de don Luis Rodríguez Torres; 2) entre el 2 de diciembre y el 24 de diciembre de 1973, en el caso de don Juan Ojeda Mercegue; y 3) entre el 11 de septiembre y el 1 de octubre de 1973, y entre el 25 de octubre y el 9 de diciembre de 1973, respecto de don Rafael Muñoz Opazo, y siendo del caso que, entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración



de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el **10 de octubre de 2019**, igualmente ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2.332 del Código Civil.

En subsidio, en caso que el tribunal estime que la norma anterior no es aplicable al caso de autos, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2.515, en relación con el artículo 2.514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la anotada fecha de notificación de la acción civil que contesta, transcurrió con creces el plazo que establece el citado artículo 2.515 del Código Civil.

Se extiende **sobre generalidades de la prescripción**, indicando que por regla general, todos los derechos y acciones son prescriptibles, por ende, la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que en este caso no existe y pretender que la responsabilidad del Estado sea imprescriptible, sin que exista un texto constitucional o legal expreso que lo disponga, llevaría a situaciones extremadamente graves, absurdas y perturbadoras, repasando que la prescripción es una institución universal y de orden público, siendo efectivo que las normas del Título XLII del Código Civil, que la consagran y, en especial, las de su Párrafo I, se han estimado siempre de aplicación general a todo el derecho y no sólo al derecho privado. Entre estas normas está el artículo 2.497 del citado cuerpo legal, que manda aplicar las normas de la prescripción a favor y en contra del Estado, disposición que consagra, con carácter obligatorio, el principio de que, al igual que tratándose de las relaciones entre particulares (que es el sentido de la expresión “igualmente” que emplea el precepto) la prescripción afecta o favorece, sin excepciones, a las personas jurídicas de derecho público, a pesar de que éstas, como lo señala el artículo 547, inciso 2º, del Código Civil, se rijan por leyes y reglamentos especiales. Menciona que, la prescripción es una institución de aplicación general en todo el ámbito jurídico y de orden público, pues no cabe renunciarla anticipadamente (artículo 2.494, inciso 1º, del Código Civil). La responsabilidad que se atribuye al Estado y la que se reclama en contra de particulares tienen la misma finalidad: resarcir un perjuicio, reponiendo en el patrimonio dañado, el menoscabo que haya sufrido y como es sabido, toda acción patrimonial crediticia se extingue por prescripción, de conformidad con los artículos 2.514 y 2.515 del Código Civil.

Enseguida, refiriéndose a los **fundamentos de la prescripción** indica que, la prescripción tiene por fundamento dar fijeza y certidumbre a toda clase de derechos emanados de las relaciones sociales y de las condiciones en que se desarrolla la vida, aun cuando éstas no se ajusten a principios de estricta equidad, que hay que subordinar, como mal menor, al que resultaría de una inestabilidad indefinida.

Sostiene que, en la especie, el ejercicio de las acciones ha sido posible durante un número significativo de años, desde que la demandante estuvo en situación de hacerlo.

Comenta y analiza jurisprudencia sobre la materia, en particular la **sentencia del pleno de la Excm. Corte Suprema de 21 de enero de 2013**, sobre unificación de jurisprudencia de demandas de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile por hechos acaecidos entre el 11 de



septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, como asimismo, reciente jurisprudencia de la I. Corte de Apelaciones de Concepción de fallo dictado por la Primera Sala de a I. Corte de Apelaciones de Concepción en causa Rol 1242- 2016, de fecha de 6 de abril de 2017, que acoge la excepción de prescripción extintiva opuesta por el Fisco de Chile y declara que se rechaza la demanda

Indica respecto al **contenido patrimonial de la acción indemnizatoria** que, la indemnización de perjuicios, cualquiera sea el origen o naturaleza de esta, no tiene un carácter sancionatorio, de modo que jamás ha de cumplir un rol punitivo para el obligado al pago y su contenido es netamente patrimonial. Sobre el particular debe considerarse, como reiteradamente se ha planteado por la doctrina fiscal sustentada en sus diversas defensas y lo ha recogido la más nueva y reiterada jurisprudencia, que en la especie se ha ejercido una acción de contenido patrimonial que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que no cabe sino aplicar, en materia de prescripción, las normas del Código Civil, lo que no contraría la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue, en atención a que la acción impetrada pertenece -como se ha dicho- al ámbito patrimonial. En efecto, basta considerar que el derecho a indemnización puede ser y ha sido objeto de actos de disposición, tales como renuncia o transacción (incluso en casos de violaciones a los Derechos Humanos), por lo que no existe fundamento plausible para estimar que se trata de una acción ajena a la prescripción liberatoria que no es sino una suerte de renuncia tácita por el no ejercicio oportuno de la misma.

Argumentando acerca de las **normas contenidas en el Derecho Internacional**, indica que en cuanto a que la parte demandante alega imprescriptibilidad de la acción para obtener la reparación por los daños reclamados conforme al derecho internacional de los derechos humanos, en este sentido, se hace cargo en particular de ciertos instrumentos internacionales, aunque no todos ellos aparecen citados en la demanda, adelantando desde ya que ninguno contempla la imprescriptibilidad de la acción civil derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad o que prohíba o impida la aplicación del derecho interno en esta materia, entre éstos, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, aprobada por Resolución N.º 2.391 de 26 de Noviembre de 1968, y en vigor desde el año 1970, los Convenios de Ginebra de 1949, ratificados por Chile en 1951, que se refieren exclusivamente a las acciones penales para perseguir la responsabilidad de los autores de los delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, de modo tal que no cabe extender la imprescriptibilidad a las acciones civiles indemnizatorias, tal como ha resuelto nuestro Máximo Tribunal, la Resolución N° 3.074, de 3 de diciembre de 1973, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, denominada *“Principios de Cooperación Internacional para el descubrimiento, el arresto, la extradición y el castigo de los culpables de crímenes contra la humanidad”*, que se refiere exclusivamente a las acciones penales para perseguir la responsabilidad de los autores de los delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, de modo tal que no cabe extender la imprescriptibilidad a las acciones civiles indemnizatorias, la Convención



Americana de Derechos Humanos, respecto de la que hemos de señalar que sin perjuicio que la aplicación de dicho Tratado no es atinente al caso *sub-lite* puesto que, en la época en que acontecieron los hechos, no estaba vigente, dado que su promulgación se produjo por Decreto Supremo N° 873, publicado en el Diario Oficial el 5 de enero de 1991; ninguna duda cabe que la citada normativa no establece la imprescriptibilidad en materia indemnizatoria.

Sigue citando jurisprudencia al efecto de la Excma. Corte Suprema, la que ha desestimado la aplicación de esa normativa en diversos fallos, como lo ha establecido conociendo del recurso de casación interpuesto en los autos Ingreso N° 1.133-06, caratulados “Neira Rivas, Gloria con Fisco de Chile”, de 24 de julio de 2007 y causa “Martínez Rodríguez y otra con Fisco de Chile”, autos ingreso N° 4.067-2006, en fallo de fecha 29 de octubre de 2007, cuyos considerandos atinentes transcribe al efecto.

Sintetiza indicando que, no habiendo, en consecuencia, norma expresa de derecho internacional de derechos humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, el Tribunal no puede apartarse del claro mandato de la ley interna al resolver la presente contienda y aplicar las normas contenidas en los artículos 2.332 y 2.497 del Código Civil, que establecen las reglas sobre prescriptibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado, por lo que deberá rechazar la demanda indemnizatoria por encontrarse prescritas las acciones civiles deducidas.

En cuanto al **daño e indemnizaciones reclamadas**, en **subsidio** de las defensas y excepciones precedentes, opone las siguientes **alegaciones** en cuanto a la naturaleza de la indemnización solicitada y el monto pretendido, indicando que los demandantes ejercen sus acciones de carácter indemnizatorio por daño moral y solicitan, por ese concepto una suma de dinero de **\$200.000.000.-, para cada uno de ellos**, monto que estima resulta excesivo, por los argumentos que se señalan: sobre la fijación de la indemnización por daño moral, hace presente que, éste dependerá de las secuelas sufridas con motivos de los hechos objeto de la demanda, y de conformidad a los antecedentes que obren en autos en la etapa probatoria, por ende, la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva, lo que dependerá de las secuelas sufridas con motivos de los hechos objeto de la demanda, y de conformidad a los antecedentes que obren en autos en la etapa probatoria y en esa perspectiva hay que regular el monto de la indemnización, asumiendo la premisa indiscutida de que nunca puede ser una fuente de lucro o ganancia, sino que debe ser un procedimiento destinado para atenuar los efectos o el rigor de la pérdida extrapatrimonial sufrida. Advierte que tampoco resulta procedente invocar la capacidad económica del demandante y/o del demandado como elemento para fijar la cuantía de la indemnización, pues,



como se ha dicho, el juez sólo está obligado a atenerse a la extensión del daño sufrido por la víctima, en la cual no tienen influencias esas capacidades.

Prosigue indicando en **subsidio de las alegaciones precedentes de reparación satisfactiva, y de prescripción, la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del estado y guardar armonía con los montos establecidos por los tribunales**, que en la fijación del daño moral por los hechos de autos, el tribunal debe considerar todos los pagos recibidos por la actora a través de los años por parte del Estado conforme a las leyes de reparación (19.992, sus modificaciones y demás normativa pertinente), y que seguirán percibiendo a título de pensión, y también los beneficios extrapatrimoniales que esos cuerpos legales contemplan, pues todos ellos tienen por objeto reparar el daño moral y de no accederse a esta petición subsidiaria implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.

También hace presente que para la adecuada regulación y fijación del daño moral deben considerarse como un parámetro válido los montos establecidos en las sentencias de los tribunales en esta materia, lo que implica rebajar sustancialmente los montos pecuniarios demandados.

Alega la improcedencia del pago de reajustes e intereses haciendo presente que, los reajustes sólo pueden devengarse en el caso de que la sentencia que se dicte en la causa acoja la demanda y establezca esa obligación, y además desde que dicha sentencia se encuentre firme o ejecutoriada, la fecha de interposición de la demanda de autos a tramitación, o de su notificación, y mientras no exista sentencia firme o ejecutoriada, ninguna obligación tiene el demandado de indemnizar, y por tanto, no existe ninguna suma que deba reajustarse, lo que implica que, en casos como el de autos, los reajustes que procedieren de ninguna manera podrían contabilizarse desde una fecha anterior a aquella en que la sentencia que los concede se encuentre firme o ejecutoriada. El reajuste es un mecanismo económico-financiero que tiene por objeto neutralizar el efecto que los procesos inflacionarios o deflacionarios tienen sobre la moneda de curso legal. Desde esta perspectiva, no procede aplicar la corrección monetaria a partir de una fecha anterior a la determinación del monto respectivo por sentencia ejecutoriada.

Respecto de los intereses, cita el artículo 1551 del Código Civil que establece expresamente que el deudor no está en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y ha retardado el cumplimiento de la sentencia. Cita jurisprudencia al efecto y finaliza indicando que en el eventual caso que el tribunal decida acoger la acción de autos y condenar al demandado al pago de una indemnización de perjuicios, tales reajustes e intereses sólo podrán devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada y el demandado incurra en mora.

TERCERO.- Que, evacuando el trámite de **Réplica** la demandante reitera íntegramente la demanda, solicitando sea acogida con costas, resaltando que el Consejo de Defensa del Estado, en un acto de buena fe, no discute los hechos que han sido invocados en la demanda.

Adiciona respecto de **la excepción de reparación integral** que, sin perjuicio de que el Consejo de Defensa del Estado esgrime como argumento el



hecho de que el demandante ha obtenido pensiones de reparación con arreglo a las leyes Nro. 19.234, Ley N° 19.992 que estableció medidas de reparación para las personas calificadas como víctimas de prisión política y tortura, y sus modificaciones, y a la Ley Nro. 20.874, esclarece que eso no es óbice para que se indemnice mediante un monto fijado por un tercero imparcial, que es un tribunal de la República, resultando irreconciliable con la normativa internacional la pretensión de oponer excepción de pago, porque el derecho común interno sólo es aplicable cuando no contradice el derecho internacional, en materias de graves violaciones a los derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad.

Indica que la preceptiva invocada por el Fisco -que sólo consagra un régimen de pensiones asistenciales- no es de ninguna manera incompatible con la indemnización que aquí se persigue, ya que estas reparaciones no dan cabida para reparar todo el daño que se les ha ocasionado a las víctimas. Por otra parte, no se ha establecido en las respectivas leyes ya mencionadas, ningún régimen de incompatibilidad con las indemnizaciones judiciales, ni mucho menos que su aceptación implique una renuncia a las acciones judiciales correspondientes. Con esas leyes, el Estado asume voluntariamente formas distintas de reparación y reitera que no implica la renuncia de una de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare su procedencia por los medios que autoriza la ley.

En lo que toca a **la excepción de prescripción**, refiere que la jurisprudencia de la E. Corte Suprema ha sido enfática en señalar, en múltiples ocasiones que, tratándose de un delito de lesa humanidad cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción contenidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, la que es integrante del ordenamiento jurídico nacional de acuerdo con el inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental, y que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito e incluso por el propio derecho interno, que en virtud de la Ley 19.123 reconoció de manera explícita la innegable existencia de los daños y concedió también a los familiares de las víctimas calificadas como detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas, por violación a los derechos humanos en el periodo 1973-1990, comprendidas en los Informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, beneficios de carácter económico o pecuniario, idea que se ha repetido en demandas interpuestas por ex prisioneros políticos víctimas de torturas y/o sobrevivientes de los centros clandestinos de detención y tortura como la demandante de autos, por consiguiente, cualquier pretendida diferenciación en orden a dividir ambas acciones y otorgarles un tratamiento desigual resulta discriminatoria y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad que reclama.

Sintetiza señalando que pretender aplicar las disposiciones del Código Civil a la responsabilidad derivada de crímenes de lesa humanidad, posibles de cometer con la activa colaboración del Estado, como derecho común supletorio a todo el ordenamiento jurídico, hoy resulta improcedente y ello encuentra su



fundamento en los principios generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su consagración normativa en los tratados internacionales ratificados por Chile, los cuales obligan al Estado a reconocer y proteger este derecho a la reparación completa, en virtud de lo ordenado en los artículos 5°, inciso segundo, y 6° de la Constitución Política de la República, no resultando aplicables a estos efectos las reglas del Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles comunes de indemnización de perjuicios. Redundando indica que, además del evidente daño moral, en el caso de autos se está ante una violación de derechos esenciales de los demandantes por parte de agentes estatales, que hace surgir en la obligación estatal de reparar.

Estima en cuanto al monto de la indemnización que este se encuentra del todo ajustado a la justicia ya que se trata del daño moral de la mayor entidad y de todos modos es el tribunal el llamado a determinar soberanamente el monto del daño moral y desde cuando se aplican los reajustes e intereses; constatándose al efecto que, los montos de las indemnizaciones se han ido incrementando y se está llegando a indemnizaciones reales y serias, sobre todo en aquellas demandas en las que es el Estado quien debe responder por graves crímenes cometidos en contra de sus propios ciudadanos.

Finaliza indicando que los reajustes e intereses demandados están conforme a derecho, puesto que un tribunal fija los montos en un momento determinado, pensando en el valor adquisitivo de esa fecha, razón por la cual tiene que considerar la desvalorización.

CUARTO.- Que, evacuando el trámite de **Dúplica**, el Fisco de Chile, ratifica la totalidad de las argumentaciones expresadas en la contestación de la demanda de autos, reiterando el rechazo de la demanda y sosteniendo nuevamente que los actores ya han sido indemnizados, en virtud de las reparaciones establecidas por ley, y de la que han sido objeto don Luis Alberto Rodríguez Torres, don Juan Ojeda Mercegue, y don Rafael Arcángel Muñoz Opazo, en lo económico, salud, educación, y en el ámbito moral y satisfactiva. Señala que, la normativa invocada por su parte al oponer la excepción de reparación fue dictada con la finalidad expresa de atender en su integridad la reparación de las víctimas y de los familiares de las víctimas de delitos de lesa humanidad, acogiendo las directrices del derecho humanitario que impone a los Estados establecer programas de reparación del daño causado. La comunidad internacional demanda de los Estados investigar dichos ilícitos, sancionar a los responsables y reparar a las víctimas o a sus familiares. Nuestro país ha cumplido con cada uno de dichos aspectos, lo que ha tenido reconocimiento internacional, e incluso de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como se expuso al contestar el libelo. Indica que ha explicado latamente que la presente acción jurisdiccional se encuentra inserta en lo que se denomina la justicia transicional, cuya regulación permite demostrar que los actores han optado por los beneficios reparatorios de la Ley 19.992 y sus modificaciones. Y ese texto legal ha sido claro en comprender el daño moral en forma expresa, y en establecer la incompatibilidad de sus beneficios con las pretensiones de una acción judicial centrada únicamente en lo económico, como lo dispone su artículo 4°.



Asegura que la demandante interpreta extensivamente dicho artículo 4°, pues la compatibilidad de la pensión de reparación que allí se contempla dice relación con otra pensión, únicamente para el caso de que estuviese adscrito en algún régimen previsional, y con la finalidad de que no perdiera la posibilidad de alcanzar la correspondiente pensión o jubilación. Una atenta lectura de dicha norma no deja lugar a dudas de su correcto sentido, que no es el que intenta sentar indebidamente la parte demandante.

En relación a **la excepción de prescripción** opuesta, indica que, tratándose autos de una acción exclusivamente pecuniaria, que persigue una suma de dinero y ningún otro aspecto en lo integral, no hay en la réplica fundamento alguno que justifique la imprescriptibilidad, dado que no hay tratado, convención o declaración del derecho humanitario que establezca e imponga una acción indemnizatoria ilimitada en el tiempo y siempre ha quedado claro que en materia de prescripción se hace una distinción nítida que surge de los objetivos sociales perseguidos, diferenciando el aspecto penal del civil. Cada uno de dichos aspectos tiene una regulación diferente, como lo explicó al contestar la demanda. La analogía o la coherencia que se exponen en algunos fallos no tienen la suficiente claridad y sustento para entender que las responsabilidades penales y civiles, en caso de delitos de lesa humanidad, constituyen una unidad indisoluble. En lo que hay claridad y cierta uniformidad doctrinaria y jurisprudencial está referido a la imprescriptibilidad de las acciones penales para perseguir tales ilícitos, lo que se ve refrendado por la existencia de tratados que así, en forma expresa, lo establecen. Sin embargo, ello no ocurre en la parte civil derivada de los mismos.

En cuanto al monto demandado, estima que es excesivo, consideración que no cambia en razón de los montos fijados en otras causas, respecto de las cuales también se sostuvo que eran desproporcionados.

Finaliza indicando que, en cuanto a la fecha desde la cual se deben calcular los intereses, ello sólo puede ocurrir desde que el fallo quede firme y a partir de la mora del deudor en el cumplimiento de la obligación.

QUINTO.- Que, recibida la causa a prueba la demandante ha aparejado al primer otrosí de su libelo de folio 1 y presentaciones de folios 30, 40, 41, 42 y 43, prueba **documental** consistente en:

- 1.- Imagen digitalizada de copia autorizada de escritura pública de fecha 02 de agosto de 2019, otorgado ante notario público suplente de agrupación de comunas de Concepción don Jorge Eduardo Francisco Ogalde Verdugo, Repertorio N° 812, donde consta mandato judicial conferido por los demandantes a don Boris Paredes Bustos, para actuar en su representación.
- 2.- Imagen digitalizada de artículo titulado “Algunos Factores de Daño a la Salud Mental”, elaborado por el Programa de Salud Mental de la Vicaría de la Solidaridad e incorporados en los autos rol C-22.561-2018, del 28° Juzgado Civil de Santiago, seguidos por la misma materia.
- 3.- Imagen digitalizada de artículo titulado “Algunos problemas de salud mental detectados por equipo psicológico – psiquiátrico” del mes de julio del año 1978, elaborado por el programa de salud mental de la Vicaría de la Solidaridad.
- 4.- Imagen digitalizada de artículo titulado “Tortura, tratos crueles e inhumanos en 1980. Su impacto psicológico” del mes de julio del año 1980, elaborado por el programa de salud mental de la Vicaría de la Solidaridad.



- 5.- Imagen digitalizada de artículo titulado “Trabajo Social, una experiencia solidaria en la promoción y defensa de los Derechos Humanos” del mes de Abril del año 1987, suscrito por las trabajadoras sociales Victoria Baeza Fernández, Norma Muñoz Peñailillo, María Luisa Sepúlveda Edwards y Ximena Taibo Grossi, del departamento jurídico de la Vicaría de la Solidaridad.
- 6.- Imagen digitalizada de artículo titulado “Salud Mental y violaciones a los Derechos Humanos” del mes de junio del año 1989, suscrito por el Dr. Andrés Donoso, Dr. Guillermo Hernández, Ps. Sergio Lucero, Dr. Ramiro Olivares y Aux. Enf. Janet Ulloa, del equipo de salud de la Vicaría de la Solidaridad.-
- 7.- Imagen digitalizada de Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Valech 1
- 8.- Imagen digitalizada de Nómina de Presos Políticos y Torturados Comisión Valech 1 en la que el demandante don Rafael Arcángel Muñoz Opazo, figura con el N° 16.271.
- 9.- Imagen digitalizada de Nómina de presos políticos y torturados Comisión Valech 2 en la que el demandante don Luis Alberto Rodríguez Torres, figura con el N° 7.542 y don Juan Ojeda Mercegue, figura con el N° 6.094.
- 10.- Imágenes digitalizadas de copia de antecedentes de carpeta de don Luis Alberto Rodríguez Torres y de don Juan Ojeda Mercegue obtenidos del Instituto Nacional de Derechos Humanos y presentados ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.
- 11.- Imagen digitalizada de Evaluación de Daño Abreviada de don Luis Alberto Rodríguez Torres emitido por el PRAIS de Talcahuano de fecha 24 de Mayo de 2022.
- 12.- Imagen digitalizada Evaluación de Daño Abreviada de don Juan Ojeda Mercegue emitido por el PRAIS de Talcahuano de fecha 17 de Septiembre de 2020.
- 13.- Imagen digitalizada de Certificado Psicológico y Social de don Rafael Arcángel Muñoz Opazo firmado por doña Fresia Alejandra Vargas Neira, psicóloga y por don José Miguel Guzmán Rojas, Director Ejecutivo, de ONG CINTRAS, de fecha 04 de Agosto de 2022.
- 14.- Imagen digitalizada de Oficio Ord. N°62090/2019, emitido por el Instituto de Previsión Social, con fecha 18 de noviembre de 2019, mediante el cual informa anexo con detalle de beneficios de reparación de las leyes N°19.992 y 20.874, recibidos por don Rafael Arcángel Muñoz Opazo, Juan Ojeda Mercegue y Luis Alberto Rodríguez Torres, en sus calidades de víctimas de Prisión Política y Tortura (Ley Valech).

SEXTO.- Que, por su parte la demandada ha aparejado al proceso al segundo otrosí de su presentación de folio 9, **documental** consistente en:

- 1.- Resolución TRA N° 45/142/2017, emitida por el Consejo de Defensa del Estado, sobre nombramiento de doña Ernestina Ruth Israel López, en el cargo de Abogado Procurador Fiscal de Santiago.

SEPTIMO.- Que, del mérito de autos, documentos individualizados en el motivo Quinto del presente fallo y dentro del contexto político de público conocimiento acontecido a partir del 11 de septiembre de 1973, con el derrocamiento del gobierno constitucional del presidente Salvador Allende Gossens, tomando el poder un régimen *de facto* que se extendería por casi 17 años, caracterizado por una situación de violaciones masivas y sistemáticas a



los derechos humanos, violencia política, jurídica y social de la que fueron víctimas cientos de miles de personas en el país, se encuentra acreditado que “efectivamente don: **Luis Alberto Rodríguez Torres**, nacido el 15 de Mayo de 1952, hijo del fundador del Partido Socialista de la VIII Región don José Manuel Rodríguez Fuentes y practicante en Petro Daw, a la fecha de ocurrencia de los hechos era militante de ese partido. El día 12 de septiembre de 1973, en horas de la tarde, en circunstancias que se encontraba en su domicilio fue detenido sin que mediara orden judicial y sin causa legal alguna, por infantes de Marina pertenecientes a la Segunda Zona Naval de Talcahuano, quienes los trasladaron a una base naval en la ciudad de Talcahuano denominado Cuartel Rodríguez, lugar donde permaneció privado de libertad alrededor de cuatro semanas, hasta el 28 de octubre de 1973. Durante su cautiverio en ese recinto fue víctima de interrogatorios, donde le mostraban fotos y nombres de personas que no conocía, sometido a torturas físicas y psicológicas durante el día y la noche. Posteriormente, fue llevado al gimnasio Apostadero, junto a otros detenidos, por funcionarios de la Infantería de Marina Base Naval de Talcahuano, donde continuaron los interrogatorios y las torturas físicas y psicológicas consistentes en ser desprovisto de sus ropas e ingresado a las duchas donde era torturado con aplicación de corriente hasta caer desmayado. Fue amenazado de sufrir fusilamiento y que luego sería arrojado al mar. En ese recinto permaneció privado de libertad durante un mes, para ser luego trasladado a la Isla Quiriquina por el personal aprehensor del mismo estamento, lugar donde permaneció detenido durante cinco meses y obligado a realizar trabajos forzados y fue víctima nuevamente de reiteradas torturas sufriendo diversas lesiones entre las que impresionan una fractura de tobillo y la rotura del tendón de Aquiles del pie izquierdo, de modo que fue trasladado al Hospital Naval donde fue operado y le pusieron yeso en la pierna izquierda, siendo devuelto a la Isla Quiriquina, donde siguieron sus padecimientos, entre éstos la golpiza con un culatazo con el arma de un infante de marina que lesionó su ojo izquierdo, perdiendo 30% de visión en dicho ojo, producto del golpe. Sufrió diversos tormentos tales como la incertidumbre acerca del destino de compañeros de prisión a quienes los sacaban para supuestos “chequeos médicos” y no regresaban nunca más. En el mes de Febrero del año 1974, lo llevaron junto a su hermano Juan a la Comandancia Base Naval, donde les hicieron prometer que lo que habían visto, oído y sufrido lo debían guardar por siempre, de lo contrario serían nuevamente detenidos y fusilados. Posteriormente, fue llevado al Servicio de Inteligencia de la Base Naval de Talcahuano, donde nuevamente fue interrogado y le hicieron firmar un documento, que no pudo leer, quedando finalmente en libertad el 28 de Marzo de 1974. Estuvo ilegal y arbitrariamente privado de libertad por 6 meses y 15 días. Fue diagnosticado con las enfermedades de trastorno depresivo ansioso, trastorno de descontrol impulsivo, trastorno de adaptación con ánimo depresivo e irritable crónico con rasgos paranoideos, a consecuencia de su prisión política; don **Juan Ojeda Mercegue**, nacido con fecha 21 de Junio de 1944, a la fecha de ocurrencia de los hechos, se desempeñaba como obrero, era delegado del personal obrero y representante sindical de la empresa donde trabajaba Sigdo Kopeer de Talcahuano y era militante del Partido Comunista. Es detenido el día 02 de Diciembre de 1973, sin mediar orden judicial alguna y



sin causa legal, por personal de Infantería de Marina, en los momentos en que llegaba a su domicilio después de su trabajo. Al ser capturado le pusieron unas gomas elásticas en los ojos y lo trasladaron amarrado a un camión a punta de culatazos de fusil donde sus aprehensores caminaban sobre sus cuerpos. En tales instantes, otro grupo de infantes de marina allanaron su hogar donde se encontraba su cónyuge embarazada y su hija de un año de edad, buscando supuestas armas. Es llevado a la Base Naval de Talcahuano, donde fue interrogado y torturado física y verbalmente y luego llevado a la Isla Quiriquina, donde fue encerrado en el Gimnasio de Grumetes, acusado de agitador político y comunista por su condición de Delegado del Personal Obrero y postulante a la Directiva Sindical. Se mantuvo en precarias condiciones de higiene y alimentación, durmiendo en un suelo previamente mojado por sus captores y constantemente torturado con golpes de pies y puños y golpes de agua con mangueras de alta presión. Fue puesto en libertad el día 24 de Diciembre de 1973, con la amenaza de que si algo ocurría en el barrio donde vivía volverían para fusilarlo. Permaneció privado de libertad por un total de 22 días, producto de ello y de los martirios a que fue sometido padece de estrés post traumático hasta la fecha; don **Rafael Arcángel Muñoz Opazo**, nacido con fecha 23 de Septiembre de 1948, a la fecha de ocurrencia de los hechos, era militante de las Juventudes Comunistas y empleado público. Fue detenido en su domicilio por personal del Ejército de Chile el día 11 de Septiembre de 1973, siendo subido a un camión, donde se encuentra con algunos compañeros de trabajo, siendo trasladado al regimiento donde permaneció dos días y luego llevado a la Cuarta Comisaría de Concepción, lugar donde fue torturado física y psicológicamente, pues sus captores pensaban que tenía armas escondidas y constantemente amenazado de muerte. Luego, fue trasladado a la Isla Quiriquina, lugar donde es recibido con un fuerte golpe con una metralleta en el estómago, que lo deja sin respiración, por personal de Infantería de Marina. En dicho lugar permaneció por alrededor de veinte días y es interrogado y torturado permanentemente con golpes de pies y puños en todo su cuerpo y culatazos y aplicación de corriente, además de hacerlo dormir en un piso mojado. Fue amarrado y sumergido en el mar. Permanece secuestrado en la Isla Quiriquina hasta el día 01 de Octubre de 1973, fecha en la que es dejado en libertad. Posteriormente, el día 25 de Octubre de 1973, resultó nuevamente detenido en su lugar de trabajo por personal de Investigaciones, siendo llevado a un subterráneo del Cuartel de la Policía de Investigaciones, con otros detenidos, y recibiendo numerosos golpes y gritos. Al día siguiente, fue trasladado al Regimiento Guías de Concepción, lugar donde fue obligado a tenderse en el suelo, junto a otros detenidos, mientras los militares corrían sobre sus cuerpos. El mismo día, es trasladado al Estadio Regional de Concepción, lugar donde permanece detenido por 45 días, y donde continúan las torturas consistentes en golpes de pies y puños y simulacros de fusilamiento. Hasta la fecha sufre de “Síndrome Secuencial a Traumatización Extrema”. Por todas las experiencias vividas y padecimientos sufridos, don Luis Alberto Rodríguez Torres, don Juan Ojeda Mercegue y don Rafael Arcángel Muñoz Opazo, han sido reconocidos por el Estado de Chile como víctimas calificadas de prisión política y torturas por la Comisión de Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas Prisión Política y



Tortura, Valech I y II y registrados con los N°s 7542, 6094 y 16.271, respectivamente, de la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas elaborado por la antedicha comisión. Tales acontecimientos experimentados por los demandantes les afectó directamente la salud física, psicológica y emocional de manera integral e irreparable, y que ocasionaron secuelas que han permanecido en el tiempo y que han derivado en una interrupción y alteración de la vida, permanente depresión, angustia, sufrimiento y temores y consecuente inestabilidad social y laboral y dificultades para el desarrollo de una vida plena”.

OCTAVO.- Que, es posible establecer que estos mismos hechos descritos en los párrafos precedentes, son los que sustentan la acción de indemnización de perjuicios que deducen los demandantes en contra del Fisco de Chile, a raíz de los daños y perjuicios sufridos por don Luis Alberto Rodríguez Torres, don Juan Ojeda Mercegue y don Rafael Arcángel Muñoz Opazo, por sus repentinas, forzadas e injustificadas detenciones, secuestros, torturas, tormentos, vejámenes y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes perpetrados por agentes del Estado, hechos que caben dentro de la calificación de crímenes de lesa humanidad y que constituyen, por ende, una violación grave a las normas internacionales sobre derechos humanos.

NOVENO.- Que, el señalado informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, como a su turno la Ley N° 19.123, en cuanto crea la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación estableciendo que como servicio descentralizado le corresponderá promover la reparación del daño moral de las víctimas a que se refiere el artículo 18, remitiéndose luego al artículo 17, norma que se remite a la individualización de las personas que se realiza en el volumen segundo del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, se desprende con claridad que el Estado reconoció las calidades de víctimas de violación a los Derechos Humanos o de violencia política a don Luis Alberto Rodríguez Torres, don Juan Ojeda Mercegue y don Rafael Arcángel Muñoz Opazo, según da cuenta la nómina de personas reconocidas como víctimas singularizada en el motivo Quinto.

DECIMO.- Que, de lo reseñado en los motivos precedentes ha quedado establecida la responsabilidad del Estado en el caso en análisis, resultando necesario consignar que en estos autos los actores ha accionado de indemnización de perjuicios pretendiendo obtener el resarcimiento de los daños morales sufridos y ocasionados por y a consecuencia del actuar de agentes del Estado en las detenciones ilegales, secuestros, torturas, tormentos, vejámenes y tratos crueles, inhumanos y degradantes de don Luis Alberto Rodríguez Torres, don Juan Ojeda Mercegue y don Rafael Arcángel Muñoz Opazo.

DECIMO PRIMERO.- Que, solicitando el rechazo de la demanda deducida de contrario el Fisco de Chile ha interpuesto la excepción de improcedencia de la indemnización por haber sido reparados integralmente los demandantes, fundado en que éstos ya han sido indemnizados en conformidad a la Ley 19.123, en los términos analizados en el motivo Segundo del presente fallo.

DECIMO SEGUNDO.- Que, atendida la naturaleza de la reparación integral establecida en la Ley 19.123 y sus modificaciones, otorgada en forma



voluntaria por el Estado de Chile en el marco de cumplimiento de tratados internacionales ratificados por Chile, y que en ella misma establece que los beneficios por ella otorgados no son incompatibles con otras reparaciones, siempre reconociendo el principio de reparación integral que sostiene el ordenamiento regulatorio internacional de los Derechos Humanos, no resulta suficiente en modo alguno para fundamentar una excepción en los términos como lo ha hecho la demandada. Así, es necesario precisar que la normativa invocada por el Estado, que solo establece pensiones y bonos asistenciales, no contempla incompatibilidad alguna con la indemnización que en esta causa se persigue, (artículo 24) sin que ella haya sido otorgada para reparar todo daño moral inferido a las víctimas de atentados a los Derechos Humanos, tratándose de distintas formas de reparación, no importando en caso alguno la renuncia de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare la procedencia de una indemnización total por daño moral, por los medios que autoriza el ordenamiento jurídico. Que, por lo demás, a juicio de esta sentenciadora, y a mayor abundamiento específicamente en el caso de autos, en cuanto a los demandantes don don Luis Alberto Rodríguez Torres, don Juan Ojeda Mercegue y don Rafael Arcángel Muñoz Opazo, en sus calidades de víctimas directas de violaciones a los Derechos Humanos, sin perjuicio de haber sido beneficiarios de una pensión mensual de reparación conforme a la Ley 19.123, cuyo establecimiento tuvo el propósito de “desagravio, satisfacción completa de la ofensa, daño o injuria”, sí resulta procedente que sean resarcidos del evidente daño moral que en diversas dimensiones han padecidos y encontrándose acreditado en autos la perpetración de los delitos de secuestros, torturas, tormentos y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, en las personas de don Luis Alberto Rodríguez Torres, don Juan Ojeda Mercegue y don Rafael Arcángel Muñoz Opazo, así como la participación en los mismos de agentes determinados del Estado en sus calidades de Garantes de la seguridad pública, dependiente del Estado de Chile, existe por ende el daño moral comentado, el cual como se dijo, no solo debe ser reparado por los otros beneficios sociales contemplados en la Ley 19.123, sino que, también debe ser reparado y regulado prudencialmente de acuerdo a los criterios imperantes en nuestro ordenamiento jurídico y el principio de equidad. Así, acorde con lo razonado anteriormente, resulta procedente rechazar la excepción opuesta por el Fisco de Chile.

DECIMO TERCERO.- Que, en segundo término, el Fisco de Chile ha deducido la excepción de prescripción extintiva de la acción intentada, ello conforme lo establecido en el artículo 2.332 del Código Civil, en relación a lo dispuesto en el artículo 2.497, en los términos latamente expuestos en el motivo Segundo de esta sentencia, sosteniendo que desde la fecha en que acontecieron sus detenciones ilegales, secuestros y posteriores torturas, esto es, el día 12 de septiembre de 1973, en el caso de don Luis Alberto Rodríguez Torres; 02 de diciembre de 1973, en el caso de don Juan Ojeda Mercegue; y los días 11 de Septiembre de 1973 y 25 de octubre de 1973, respecto de don Rafael Arcángel Muñoz Opazo y, aun entendiendo suspendido el plazo de prescripción hasta la restitución de la democracia, 11 de Marzo de 1990, a la fecha de notificación de la demanda, 10 de octubre de 2019, ha transcurrido en



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: KXQVXXHPZDF

exceso el plazo que establece el artículo 2.332 del Código Civil. En subsidio, opone la prescripción extintiva de cinco años contemplado para las acciones y derechos por el artículo 2.515, en relación al artículo 2.514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a la indemnización y la fecha de notificación de la demanda ya referida, transcurrió con creces el plazo establecido en el artículo 2.515.

DECIMO CUARTO.- Que, a efectos del debido análisis de la excepción en comento, es necesario tener presente que el fundamento jurídico de la acción deducida en autos por la actora lo sitúa en la responsabilidad del Estado por el daño moral en el Derecho Administrativo y Derecho Constitucional, en razón del hecho propio del Estado al haber actuado como órgano, cometiendo un ilícito a través de sus agentes, y estableciendo como autores del mismo a efectivos de la Marina y del Ejército de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile, en servicio al momento de los hechos y que como se señalare en los motivos precedentes, estos mismos hechos que sustentan la acción de indemnización de perjuicios que deducen los demandantes en contra del Fisco de Chile, caben dentro de la calificación de crímenes de lesa humanidad y que constituyen, por ende una violación grave a las normas internacionales sobre derechos humanos, y que, a través de los elementos probatorios ya ponderados, permiten desprender con claridad que el Estado reconoció las calidades de víctimas de violación a los Derechos Humanos o de violencia política a don Luis Alberto Rodríguez Torres, don Juan Ojeda Mercegue y don Rafael Arcángel Muñoz Opazo. En consecuencia, se demuestra que se está en presencia de afectados por delitos de lesa humanidad, de manera que el derecho de las víctimas de este tipo de ilícitos encuentra su fundamento en los principios generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y normativa de los tratados internacionales ratificados por nuestro país, los cuales obligan al Estado de Chile a reconocer y proteger el derecho a la reparación íntegra, en virtud de lo dispuesto en nuestra carta fundamental, en la especie inciso 2° de los artículos 5 y 6 de la Constitución Política de la República.

DECIMO QUINTO.- Que, sentado así lo anterior, corresponde continuar analizando la excepción de prescripción opuesta por el Fisco de Chile, haciendo presente que tratándose de delitos de lesa humanidad, su acción persecutoria es imprescriptible, más aun si tratándose en la especie de una demanda de indemnización por daño moral sustentada fehacientemente en la comisión por parte de agentes del Estado de delitos de secuestros simple, de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, por lo que necesariamente se deberá desestimar la excepción de prescripción opuesta por la demandada. Que, de este modo, dada la especial naturaleza de los ilícitos cometidos, lo que surge de los hechos que se han establecido, no controvertidos por el demandado, aparece que ellos, que son el fundamento de la demanda, constituyen crímenes de lesa humanidad y, por ende, una violación grave a las normas internacionales sobre Derechos Humanos, por lo que resulta improcedente declarar la prescripción de la acción indemnizatoria ejercida, como se dirá.

DECIMO SEXTO.- Que, en efecto, en la clase de delitos por los cuales se sustenta la acción indemnizatoria reclamada, y en que la acción penal



persecutoria es imprescriptible, no es coherente entender que la acción civil que de ellos deriva esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional por disposición del inciso segundo del artículo 5º de la Carta Fundamental, que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, e incluso por el propio derecho interno, que en virtud de la Ley N° 19.123 reconoció de manera explícita la innegable existencia de los daños y concedió también a los familiares de las víctimas calificadas como detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, por violación a los derechos humanos en el período 1973-1990, reconocidos por los informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, beneficios de carácter económico o pecuniario. Que, a mayor abundamiento, es necesario tener asimismo presente que, pesando sobre el Estado el deber de reparar a la víctima, este deber encuentra también su consagración en el derecho interno en el sistema de responsabilidad del Estado que deriva además del artículo 3 de la Ley 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en cuanto dispone que la administración del Estado está al servicio de la persona humana, que su finalidad es promover el bien común, y que uno de los principios a que debe sujetarse es el de la responsabilidad, lo que recoge expresamente en su artículo 4. Por consiguiente, cualquier diferenciación entre ambas acciones y otorgarles un tratamiento desigual es discriminatorio y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad que se le reclama.

DECIMO SEPTIMO.- Que, sin perjuicio de lo ya expresado, corresponde señalar que los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, consagran que la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícitos queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, de modo que estas no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar otros preceptos de derecho interno, toda vez que, si se verifica un hecho ilegítimo imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de una norma de esa índole, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la violación. En el mismo sentido la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, vigente en nuestro país desde el 27 de enero de 1980, establece en su artículo 27 que el Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones. En este sentido autores como Humberto Nogueira Alcalá, “Las Constituciones Latinoamericanas” en Anuario de derecho Constitucional Latinoamericano, Edición 2000 ha señalado que de hacerlo comete un hecho ilícito que compromete la responsabilidad internacional del mismo.

DECIMO OCTAVO. - Que, en consecuencia, solo corresponde como se señaló, desestimar la excepción de prescripción opuesta por la demandada de autos, tanto la excepción formulada por vía principal como aquella formulada por vía subsidiaria.

DECIMO NOVENO.- Que, encontrándose establecida la comisión de hechos ilícitos por agentes del Estado, de la cual surge la responsabilidad del



Estado conforme a lo establecido en el artículo 38 inciso segundo de la Constitución Política de la República, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental en cuanto prescribe que los órganos del Estado deben someter su acción a la constitución y a las leyes, y son responsables de sus actos de acuerdo a la ley, como asimismo a lo establecido en el artículo 4 de la ley 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado al disponer que *“El Estado será responsable de los daños que causen los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran afectar al funcionario que las hubiere realizado”*. Cabe señalar que el citado principio se ve reiterado en el artículo 44 del mismo texto legal. Al efecto, de las normas citadas en el párrafo precedente, solo es dable concluir que tanto el constituyente como el legislador ha expresado en forma inequívoca su intención de que el Estado se haga responsable del actuar de sus agentes, cuando este ocasiona un daño al administrado, responsabilidad que por su naturaleza cae en el ámbito de la responsabilidad extracontractual.

VIGESIMO.- Que, necesario resulta a continuación, el análisis del daño cuyo resarcimiento se pretende por los actores, en cuanto presupuesto necesario para que surja la obligación de indemnizar los perjuicios que se intenta en esta causa. Al efecto es necesario precisar que se trata en la especie del resarcimiento del daño moral, que requiere que el mismo sea cierto, vale decir, que sea real y no hipotético, recordando que el daño moral consiste, equivale y tiene su fundamento en el sufrimiento, dolor que el hecho ilícito ocasiona en la sensibilidad física, y/o en los sentimientos o afectos de una persona. El daño moral, es en consecuencia, toda lesión causada culpable o dolosamente que signifique molestias, perturbación en la seguridad personal del afectado, en el goce de sus bienes o en un agravio a sus afecciones legítimas, de un derecho subjetivo de carácter inmaterial o inherente a la persona e imputable a otra, daño que no es de naturaleza propiamente económica y que no implica, un deterioro o menoscabo real y directo en el patrimonio de la misma, susceptible de prueba y determinación directa, sino que posee una naturaleza eminentemente subjetiva.

VIGESIMO PRIMERO.- Que, atendidas las particularidades reseñadas en el motivo precedente, es dable desprender que la comprobación de la inobservancia o agravio del derecho subjetivo envuelve al mismo tiempo, la prueba de la efectividad del daño moral, de suerte que comprobada la existencia de un delito, como es el caso de autos, forzoso es concluir que se ha producido un daño y que debe ser reparado, toda vez que no podría ser de otra manera, en tanto, materialmente resulta extremadamente difícil, medir con exactitud la intensidad con que las lesiones han afectado a la víctimas, en este caso los actores, por la naturaleza del perjuicio provocado. Por ello, la naturaleza del dolor no hace indispensable la prueba del mismo, sino que se trata de un hecho evidente en cuanto las lesiones físicas y mentales sentidas, experimentadas por el sujeto causan un sufrimiento, que no requiere de evidencia, pero que en todo caso debe ser indemnizado por quien los ocasionó, tomando en cuenta todos los antecedentes reunidos y debiendo hacerse una apreciación equitativa y razonable por el tribunal.



VIGESIMO SEGUNDO.- Que, en el caso de autos, en relación al daño sufrido por los demandantes don Luis Alberto Rodríguez Torres, don Juan Ojeda Mercegue y don Rafael Arcángel Muñoz Opazo, en sus calidades de víctimas directas de violaciones a los Derechos Humanos, quienes a la fecha de sus detenciones, secuestros, torturas, tormentos, vejaciones y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes padecidos, los que acontecieron como se indicó los días 12 de septiembre de 1973, en el caso de don Luis Alberto Rodríguez Torres; 02 de diciembre de 1973, en el caso de don Juan Ojeda Mercegue; y los días 11 de Septiembre de 1973 y 25 de octubre de 1973, respecto de don Rafael Arcángel Muñoz Opazo, eran jóvenes con militancia e ideología política, estudiantes y trabajadores, con proyectos de vida, social y laborales, siendo detenidos y secuestrados, víctimas de brutales torturas y sometidos a diversos vejámenes y tormentos y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, todo ello causado por efectivos de la Marina, del Ejército de Chile y de la Policía de Investigaciones, en sus respectivos casos, siendo dable presumir que tales padecimientos y calvarios les produjo un gran dolor, angustia, aflicción, inseguridad y natural temor al momento de producirse los hechos y que innegablemente se han prolongado a lo largo de sus vidas, más aun considerando las circunstancias particulares padecidas por los actores quienes fueron detenidos, secuestrados y privados de libertad y torturados, por largos periodos de tiempo, 6 meses y 15 días, en el caso de don Luis Alberto Rodríguez Torres; 22 días, en el Juan Ojeda Mercegue; y por un total aproximado de 67 días en el caso padecido por don Rafael Arcángel Muñoz Opazo, quien fue víctima de detención y de los consecuentes suplicios en dos oportunidades; todos sintiéndose amenazados vitalmente, con el temor e incertidumbre acerca de su destino, víctimas de amenazas y hostigamientos del personal aprehensor, entre otros males, conclusión que se ve inequívocamente corroborada, con secuelas que han sido constatadas por profesionales de la salud y que se prolongaron desde la época de los hechos y que tuvo consecuencias graves en la salud de los demandantes que sirven de sustento a la presente demanda, circunstancias que en los informes emitidos acerca de las secuelas de las víctimas y de los familiares de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, revelan los daños experimentados a lo largo de los años por los actores a consecuencia de los ilícitos que motivan la presente causa y que se han extendido hasta la actualidad. Cabe destacar que, por la naturaleza de los ilícitos que afectaron a los demandantes, las circunstancias de los mismos, los acontecimientos sociales históricos de nuestro país que han permitido en algunas casos, más de cuarenta años después, conocer algunas circunstancias de las desapariciones y la ubicación de los restos mortales de algunas de las víctimas, permiten desprender en forma inequívoca la angustia permanente seguidas de las referidas experiencias traumáticas, constante que en mayor o menor medida, les ha acompañado durante el devenir de sus vidas.

VIGESIMO TERCERO.- Que, encontrándose acreditado que los actores sufrieron una lesión o detrimento en sus personas, en el desarrollo de la misma, lo que es dable presumir desde las máximas de experiencia, y la naturaleza de los hechos acreditados en autos, ocurridos en la Octava Región de nuestro país, les afectó su integridad psicológica, física, su libertad, sus



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: KXQVXXHPZDF

afectos, estabilidad y unidad familiar, esto es, en general, los atributos o cualidades morales de sus personas, con las consiguientes repercusiones en la normalidad de su existencia, necesario resulta acceder a la demanda de indemnización del daño moral experimentado por los actores, el que atendido los antecedentes que obran en el proceso y que han sido reseñados en los motivos anteriores, se accederá a la demanda de autos, teniendo presente los criterios de coherencia en la interpretación de los antecedentes, fijando a título de indemnización de perjuicios por el daño alegado prudencialmente la suma única y total \$70.000.000.- (setenta millones de pesos) **para cada uno** de los demandados don Luis Alberto Rodríguez Torres, don Juan Ojeda Mercegue y don Rafael Arcángel Muñoz Opazo.

VIGESIMO CUARTO.- Que, debiendo pagar la demandada las sumas de dineros ordenadas a pagar en el motivo precedente, ello deberá efectuarse debidamente reajustadas de acuerdo a la varia variación que experimente Índice de Precios al Consumidor entre la fecha de la presente sentencia y aquella en que efectivamente se realice el pago, más intereses corrientes para operaciones reajustables, según liquidación que se practicará en su oportunidad.

Y, vistos, además, lo dispuesto en los artículos 1437, 1698, y siguientes del Código Civil; 144, 159, 254 y siguientes, 342, 346 N° 3, 384, 430, 748 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; Ley 19.123; artículo 5 y 6 de la Constitución Política de la República, se declara:

I.- Que, se rechazan las excepciones opuestas por el Fisco de Chile, de improcedencia de la indemnización alegada por haber sido ya indemnizados los demandantes y de prescripción extintiva de la acción civil de indemnización de perjuicios, en ambas excepciones opuestas, de acuerdo a lo consignado en los motivos Décimo Segundo, Décimo Cuarto, Décimo Quinto, Décimo Sexto, Décimo Séptimo y Décimo Octavo, respectivamente, del presente fallo.

II.- Que, se acoge, con costas, la demanda de indemnización de perjuicios interpuesta con fecha 16 de septiembre de 2019/ folio 1, en cuanto la demandada deberá pagar a cada uno de los actores don LUIS ALBERTO RODRÍGUEZ TORRES, don JUAN OJEDA MERCEGUE y don RAFAEL ARCÁNGEL MUÑOZ OPAZO, la suma única y total de \$70.00.000.- (setenta millones de pesos) **para cada uno**, por concepto de daño moral, con reajustes e intereses en la forma indicada en el motivo Vigésimo Cuarto.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Dictada por doña Jacqueline Dunlop Echavarría, Juez Titular.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, veintinueve de Septiembre de dos mil veintitrés**



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: KXQVXXHPZDF



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: KXQVXXHPZDF